



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

Responsabilidad Penal del Menor

Autor/es

LARA RAMOS HIDALGO

Director/es

SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Derecho

Departamento

DERECHO

Curso académico

2018-19



Responsabilidad Penal del Menor, de LARA RAMOS HIDALGO
(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los
titulares del copyright.



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

CURSO 2018/2019

RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

AUTOR: LARA RAMOS HIDALGO

TUTOR: SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto el estudio de la responsabilidad penal del menor dentro del ordenamiento jurídico español. Estudiaremos cuándo pueden responder penalmente los menores y bajo qué circunstancias concretas. Es importante conocer la evolución legislativa de la Justicia de menores desde la creación de los primeros tribunales especializados hasta la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores.

Lo más importante del trabajo es identificar qué se entiende por menor dentro de la ley y cuál va a ser el régimen de responsabilidad para los menores dependiendo la edad que tengan en el momento de la comisión de los hechos. Además, trataremos la Justicia Restaurativa como un nuevo método de resolución de conflictos que puede tener cabida dentro del Derecho Penal de Menores por tratarse de un método alternativo que da mayor importancia la comunicación y el diálogo entre el infractor y la víctima.

Palabras clave: menor de edad, LO 5/2000, responsabilidad penal, Justicia de menores, Justicia Restaurativa.

ABSTRACT

The present work has as object the study of the criminal responsibility of the minor within the Spanish legal system. We will study when minors can respond criminally and under what specific circumstances. It is important to know the legislative evolution of the Juvenile Justice since the creation of the first specialized courts until LO 5/2000, of January 12, regulating the criminal responsibility of minors.

The most important aspect of the work is to identify what is meant by a minor for the law and what will be the responsibility regime for minors depending on the age they have at the time of the commission of the events. In addition, we will treat Restorative Justice as a new method of conflict resolution that may be included in the Criminal Law for Minors because it is an alternative method that gives greater importance to communication and dialogue between the offender and the victim.

Keywords: minor, LO 5/2000, criminal responsibility, Juvenile justice, Restorative Justice.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR EN ESPAÑA	5
2.1. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR	5
2.1.1. Principio de intervención mínima	9
2.1.2. Principio de oportunidad	10
2.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD	13
2.3. PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN	15
2.4. PRINCIPIO DE ESPECIALIZACIÓN	16
3. MODELOS DE INTERVENCIÓN CON EL MENOR INFRACTOR	17
3.1. MODELO TUTELAR O ASISTENCIAL.....	17
3.2. MODELO EDUCATIVO O DE BIENESTAR	18
3.3. MODELO DE RESPONSABILIDAD	20
3.4. MODELO MIXTO O DE LAS “4D”	21
3.4.1. Descriminalización.	22
3.4.2. Desjudicialización.	23
3.4.3. Desinstitucionalización.....	23
3.4.4. Proceso debido “due process”.	24
4. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA	24
4.1. Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para niños de 1918.	

4.2.	Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948.	26
4.3.	Ley Orgánica 4/1992, sobre reforma de la Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento ante los Juzgados de Menores.....	28
5.	LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES	29
5.1.	EL CONCEPTO DE MENOR Y DETERMINACIÓN DE LA EDAD	30
5.1.1.	Los menores de 14 años.....	32
5.1.2.	Los mayores de 14 y menores de 18 años.	33
5.1.3.	Los mayores de 18 y menores de 21 años.	35
6.	JUSTICIA RESTAURATIVA Y DERECHO PENAL DE MENORES.....	36
6.1.	Concepto y fundamento.....	36
6.2.	Mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales de conflictos .	38
7.	CONCLUSIONES.....	41
8.	BIBLIOGRAFÍA	42

1. INTRODUCCIÓN

Los menores de edad autores de un delito fueron, durante siglos, sometidos al mismo tratamiento penal que los adultos infractores sin tomar en consideración que son sujetos especiales por no haber alcanzado aún la mayor edad y encontrarse en pleno desarrollo personal y moral. El Derecho Penal de Menores, como Derecho Penal especial, nace de la necesidad de crear un Derecho singular para los menores de edad, que requieren de mayor protección por el Estado.

Con la creación en el siglo XX de los primeros Tribunales específicos para niños, el Estado advierte que no solo debe ejercer el *ius puniendi* sobre los menores, sino que el régimen de responsabilidad penal que se les aplique también debe tender a la educación y resocialización de los mismos con el fin de que se desarrollen de manera plena dentro de la sociedad que integran.

El Derecho Penal de Menores puede ser definido como un “Derecho Penal especial y una parte o sector integrante del Derecho Penal, que está orientado fundamentalmente a la prevención especial positiva en su aspecto educativo, rechazándose la prevención general o intimidación de los destinatarios de la norma, en este caso, menores de edad y jóvenes”.¹ La prevención especial positiva no sólo busca evitar la comisión de futuros delitos, sino que debe realizarse mediante la resocialización y la concienciación del menor infractor para que no vuelva a realizar esas conductas.²

Por tanto, el Derecho Penal de menores es un sector del ordenamiento jurídico que se dirige únicamente a las personas menores de edad entre los 14 y los 18 años que han cometido un delito tipificado como tal en el Código Penal y en las leyes especiales. Comparte el mismo presupuesto objetivo que el Derecho Penal de adultos, pero se diferencia de éste en las consecuencias jurídicas derivadas del delito. A los menores infractores no se les van a imponer penas, sino que se acordarán medidas socioeducativas individualizadas para cada uno de ellos buscando siempre aquella que garantice el “interés superior del menor”.

El objeto de estudio de este trabajo es conocer cuáles son las características principales del Derecho Penal de Menores y observar cuáles son las particularidades que

¹ COLÁS TURÉGANO, A, Derecho penal de menores, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, p.31.

² QUINTERO OLIVARES, G., *Parte General del Derecho Penal*, 5ª Edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp.103-106

le diferencian del Derecho Penal que le dan identidad propia para ser considerado como Derecho Penal especial.

En primer lugar, estudiaremos cuáles son los principios que inspiran la responsabilidad penal del menor en España, incidiendo en el principio del “interés superior del menor”, que debe primar en cualquier decisión que afecte a un menor penalmente responsable.

En segundo lugar, analizaremos cuáles son los diferentes modelos de intervención que existen con el menor infractor y cómo la cada vez mayor consideración del menor como sujetos de especial protección ha influido en la generación de nuevos modelos de Justicia de menores.

En tercer lugar, examinaremos cómo ha evolucionado legislativamente la Justicia de Menores desde la creación por primera vez de unos Tribunales especializados para niños hasta la regulación del sistema penal de menores actual que recoge la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En este punto estudiaremos con detenimiento cuál es el concepto de menor que incorpora la ley y cuál es el diferente sistema que se aplica a los menores en virtud de la edad que tienen en el momento de comisión de los hechos delictivos.

En último lugar podremos analizar un nuevo modelo de justicia que se está integrando dentro del ordenamiento jurídico, que se denomina “Justicia restaurativa”. Veremos cómo puede incidir positivamente su incorporación al Derecho Penal de Menores por los principios de reparación y resocialización que la caracterizan y por ser un método alternativo de resolución de conflictos.

2. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR EN ESPAÑA

2.1. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

El principio del interés superior del menor es susceptible de muchas interpretaciones. Como tal, no debe ser interpretado de manera estática ni rígida, sino de una manera dinámica y flexible para que se concrete en cada caso con el fin de llegar a comprender el significado del principio *favor minoris* o *favor filii*, que tomamos como herencia del

Derecho Romano.³ Es decir, las cuestiones que se decidan a lo largo de todo el proceso penal con el menor deben buscar el desarrollo de la personalidad y madurez del mismo.

ORNOSA FERNÁNDEZ mantiene que la finalidad que persigue el “interés superior del menor” es que tanto la decisión de intervención o no intervención de la justicia de menores se base en el beneficio o ayuda al menor infractor, conjugándolo con el objetivo de su resocialización y reeducación para que el hecho delictivo cometido no vuelva a reiterarse.⁴ HIGUERA GUIMERÁ estima que se trata del interés por la educación del menor y el libre desarrollo de su personalidad, sin olvidar que la posible medida que se le imponga debe tener una naturaleza sancionadora-educativa para que el menor comprenda de forma efectiva cuál es la responsabilidad derivada del hecho cometido.⁵

Como tal, está directamente relacionado con el derecho constitucional al “libre desarrollo personal” que recoge el art. 10 de la CE⁶, que a su vez debe tener en cuenta la situación personal, familiar y social del menor.⁷ El artículo 1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM en adelante) reconoce a los menores a los que se les aplica esta ley como sujetos de los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, haciendo especial referencia a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 (CDN en adelante) y todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por España.

Es precisamente la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en su artículo 2, la que contiene expresa referencia a la primacía del interés

³ RAVETLLAT BALLESTÉ, I., “El interés superior del niño: concepto y delimitación del término”, en *Educatio Siglo XXI*, Vol. 30 nº 2, Universidad de Murcia, 2012, p. 92.

⁴ ORNOSA FERNÁNDEZ, M^a R., *Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores*, Bosch, Comte d’Urgell, 2003, pp.76-79.

⁵ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, Bosch, Comte d’Urgell, 2003, p. 253.

⁶ Artículo 10 de la Constitución Española. “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

⁷ CRUZ BLANCA, M^a J. y BENÍTEZ ORTÚZAR, I. “El interés superior del menor y la proporcionalidad en el derecho penal de menores: contradicciones del sistema” en *El derecho penal de menores a debate. I Congreso Nacional sobre Justicia Penal Juvenil*, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 79 a 85.

superior del menor en las medidas que se adopten y que afecten a los menores sobre cualquier otro interés que pueda entrar en conflicto con éste.

El respeto por el interés superior del menor en el ámbito penal tiene su origen en la CDN, ratificada en España el 30 de diciembre de 1990, que en su artículo 3 recoge que las instituciones públicas y privadas tienen que tener una *consideración primordial* a la atención del interés superior del menor cuando tomen medidas que les afecten.⁸ Este principio ha sido precisado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N° 14⁹, que dispone que la población a la que se refiere este principio (infancia y adolescencia) se encuentra en pleno desarrollo físico y psicológico, requiriendo unas necesidades especiales y el respeto y disfrute de todos los derechos de los que gozarían como adultos.¹⁰

Las decisiones jurídicas que afectan a los menores tienen que basarse en la búsqueda del interés superior de éstos, debido a la protección específica que el ordenamiento jurídico otorga a los menores de edad.¹¹ Será necesario valorar el interés superior del menor en cada caso concreto para que las decisiones que les afectan sean las más beneficiosas y aquellas que ayuden a los menores a seguir desarrollándose personalmente e integrándose de una manera adecuada en la sociedad, siempre teniendo en cuenta las situaciones personales de los mismos.¹²

El concepto de “interés jurídico del menor” tiene una triple naturaleza:

- a) *Derecho sustantivo y subjetivo del menor*, por lo que es directamente invocable ante los Tribunales. Se pondrá de manifiesto siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un menor, teniendo que ponderar los

⁸ Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, *Boletín Oficial del Estado*, de 31 de diciembre de 1990, n° 313. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

⁹ Observación general N° 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), del Comité de los Derechos del Niño, de 29 de mayo de 2013.

¹⁰ BERNUZ BENEITEZ, M^a J. y FERNÁNDEZ MOLINA, E., *Justicia de menores*, Síntesis, Vallehermoso, 2018, pp. 71-73.

¹¹ COLÁS TURÉGAÑO, A., *Derecho penal de menores*, op. cit., p. 85.

¹² BERNUZ BENEITEZ, M^a J. y FERNÁNDEZ MOLINA, E., *Justicia de menores*, Síntesis, Vallehermoso, 2018, pp. 71-73.

distintos intereses que deben respetarse y evaluarse en la adopción de la medida.¹³

- b) *Principio jurídico interpretativo fundamental*. Se trata de un principio informador e interpretativo que debe ser modulado en cada caso para adoptar la interpretación más conforme y efectiva a la satisfacción del interés del menor.¹⁴ Sirve para argumentar y justificar que la decisión tomada es la más favorable al interés superior del menor.
- c) *Norma de procedimiento*. El proceso de adopción de decisiones que afecten a menores debe respetar todas las garantías, haciendo un balance de las posibles repercusiones negativas que puede tener la decisión para el desarrollo personal del menor. Además, deben explicarse cuáles han sido los criterios utilizados para llegar a tomar esa decisión y cómo se han ponderado los intereses del menor, teniendo especial consideración del “interés superior”.¹⁵

También la LORPM lo recoge en su Exposición de Motivos como principio inspirador y rector del Derecho penal de menores en España cuando mantiene que “en el Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor”.

Esta concreción del interés superior del menor no tiene que tenerse en cuenta sólo en criterios jurídicos, como son la adopción de medidas o el respeto a este interés a lo largo del proceso, sino que debe valorarse con otras ciencias que están especializadas en la infancia, educación y psicología.¹⁶ Así lo recoge también la Exposición de Motivos de la LORPM, “interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia”.

¹³ MORENO-TORRES SÁNCHEZ, J., “Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”, Save the Children, 2015, p. 17. Observación general N° 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial..., op. cit.

¹⁴ *Ibídem*, p.17.

¹⁵ *Ibídem*, p.17.

¹⁶ TAMARIT SUMALLA, J. M^a., “Principios político-criminales y dogmáticos del sistema penal de menores” en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., TAMARIT SUMALLA, J. M^a y GÓMEZ COLOMER, J. L., *Justicia penal de menores y jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación)*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 23-28.

La necesidad de respeto del superior interés del menor y de los principios generales del Derecho Penal mencionados se traduce en una serie de garantías en el proceso que deben ser respetadas. Entre ellas destacan el derecho a ser informado, oído y escuchado, derecho a participar e intervenir en el proceso¹⁷, la intervención de profesionales cualificados y expertos en educación, menores y psicología, la participación de los progenitores, tutores y Ministerio Fiscal, etc.¹⁸

El superior interés del menor como búsqueda de la medida más beneficiosa para el menor, como adopción de la medida más idónea para contribuir a la resocialización y reeducación del menor y como principio jurídico interpretativo hace que se infieran del mismo dos principios íntimamente relacionados con él: el principio de intervención mínima del Derecho Penal de Menores y el principio de oportunidad.

2.1.1. Principio de intervención mínima

Con base en el principio de intervención mínima, el Derecho penal debe sancionar sólo aquellas conductas más perjudiciales para la sociedad en las que las herramientas administrativas y educativas no han alcanzado su objetivo, teniendo que imponer un castigo de acuerdo a la gravedad de las infracciones cometidas. Se trata de un límite al *ius puniendi* estatal al tener que valorar los bienes jurídicos que se tienen que proteger y decidir sancionar aquellas conductas que produzcan un daño a los bienes jurídicos más importantes.¹⁹

El carácter fragmentario del Derecho penal se deriva de este principio, ya que sólo servirá para sancionar los daños más graves cometidos contra bienes jurídicos; pero, por otra parte, también le otorga carácter subsidiario al Derecho Penal al tratarlo como *ultima ratio*, es decir, como el último mecanismo para castigar las conductas que no hayan sido sancionadas por otros medios.²⁰

Específicamente en el Derecho Penal de Menores este principio cobra sentido en los *delitos de bagatela*, debido a la escasa importancia de los mismos por no provocar

¹⁷ BERNUZ BENEITEZ, M^a J. y FERNÁNDEZ MOLINA, E., *Justicia de menores*, op. cit., pp. 61-68.

¹⁸ MORENO-TORRES SÁNCHEZ, J., “Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”, Save the Children, 2015, p. 17.

¹⁹ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, Dykinson, Madrid, 2019, pp. 536-537.

²⁰ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, *Ibidem*, pp.536-547.

verdadera afectación a los bienes jurídicos que atacan. En esta rama del Derecho Penal debe intensificarse este principio al tratarse de sujetos especiales que no pueden tener consideración aún como adultos al estar en pleno desarrollo personal y de madurez. Debe fomentarse el recurso a otras soluciones alternativas de conflictos, como pueden ser la conciliación o mediación penal, al tratarse de procedimientos menos sancionatorios y con una finalidad más educativa para el menor.²¹

También la CDN hace referencia a este principio en su articulado. En concreto, el art. 40.3.b) establece que “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: b) siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales”.²²

Por tanto, el principio de intervención mínima lo que persigue es que las conductas tipificadas como delito por la normativa penal que han sido realizadas por los menores de edad tiendan a descriminalizarse y se opte por vías extrajudiciales y alternativas de resolución de conflictos.²³

2.1.2. Principio de oportunidad

El principio de oportunidad es uno de los pilares fundamentales de la singularidad del Derecho Penal de Menores dentro de la normativa penal, que está íntimamente relacionado con el *principio de intervención mínima*. GIMENO SENDRA lo define como “la facultad que al titular de la acción penal asiste para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado”.²⁴

²¹ ORNOSA FERNÁNDEZ, M^a R., *Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000...*, op. cit., pp.86-87.

²² *Ídem*.

²³ VIDAL HERRERO, M^a. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal del menor en la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores hacia un "modelo social de responsabilidad" del menor infractor*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2015.

²⁴ GIMENO SENDRA, V.: «Los procedimientos penales simplificados (Principio de oportunidad y proceso penal monitorio)», *Revista Poder Judicial*, especial II, citado en ORNOSA FERNÁNDEZ, M^a R., *Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000...*, op. cit., pp.82-85.

Por tanto, el principio de oportunidad es un mecanismo que permite al titular de la acción penal desistir de iniciar el proceso penal, sobreseer el asunto o disponer de la propia pretensión penal.²⁵ En el caso del ordenamiento jurídico español, este principio se traduce en la concesión de “amplias facultades al Ministerio Público para decidir sobre el ejercicio de la acción penal, para no ejercitarla en determinadas condiciones, a pesar de constatar la existencia de un hecho aparentemente delictivo”.²⁶

Lo recoge el artículo 18 de la LORPM disponiendo que podrá desistir el Ministerio Fiscal de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados sean constitutivos de delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas o faltas²⁷, siendo necesario que el menor no haya cometido con anterioridad hechos de la misma naturaleza. En caso contrario el Ministerio Fiscal tiene el deber de incoar el expediente. Se otorga al Ministerio Fiscal la facultad de desistimiento de la acción penal de manera discrecional cuando el mismo considere que los hechos denunciados no tienen consideración de “graves”, ni exista violencia ni intimidación en las personas. También posee el Ministerio Fiscal esta facultad en el caso de que haya conciliación o reparación entre el menor y la víctima, concediéndole el artículo 19 de la LORPM el poder de sobreseimiento del expediente por esta causa.²⁸

MOLINA LÓPEZ realiza un estudio de la incidencia del principio de oportunidad dentro del sistema penal de menores, en el que contrapone argumentos a favor y en contra del mismo centrándose en cuatro aspectos: una perspectiva jurídico penal, un enfoque estrictamente procesal, desde la óptica político-criminal y un análisis criminológico.²⁹

Desde una *perspectiva jurídico-penal*, se fomenta la naturaleza preventiva especial del sistema de responsabilidad penal de menores eliminando la carga retributiva del mismo. Queda prácticamente desvirtuada la proporción entre hechos delictivos cometidos y la sanción correspondiente a los mismos, permitiendo que el menor se vea menos amenazado por la dureza del Derecho Penal. Por el contrario, el componente preventivo

²⁵ MOLINA LÓPEZ, R., “El principio de oportunidad en el proceso penal de menores”, *Nuevo Foro Penal*, N° 72, 2009, pp. 66-68.

²⁶ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, *op. cit.*, p. 537.

²⁷ Las faltas desaparecieron del Código Penal por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Cuando la LORPM hace referencia a las “faltas” tiene que ser interpretado como una asimilación a la categoría de “delitos leves” que recoge actualmente el Código Penal.

²⁸ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, *Ibidem*, p. 537.

²⁹ MOLINA LÓPEZ, R., “El principio de oportunidad ...”, *op. cit.*, pp. 70-73.

general que el legislador incorpora en la normativa penal se ve desvirtuado al desaparecer prácticamente la discusión de la responsabilidad penal del menor y de la aplicación al mismo del Derecho penal sustantivo.³⁰

Centrándonos en el *enfoque estrictamente procesal*, el principio de oportunidad otorga cierta flexibilidad al procedimiento, fomentando la satisfacción de intereses de todas las partes intervinientes en el proceso, incluidos los de la víctima si le permite obtener la reparación del daño de una manera alternativa y más ágil. Sin embargo, rompe el sistema procesal penal al flexibilizar el *ius puniendi* del Estado permitiendo al Ministerio Fiscal adoptar funciones que corresponden propiamente a los Jueces. Además, la víctima del daño producido se ve perjudicada al disminuir su participación en el proceso o, incluso no saber cómo puede participar en el mismo.³¹

Desde el *punto de vista político-criminal*, la aplicación de este principio agiliza el sistema judicial y permite descargar a los Jueces de asuntos relacionados con menores, cuando la mayoría de ellos son de poca importancia criminal. No obstante, también supone la vulneración del principio de igualdad al permitir y legitimar al Ministerio Fiscal a actuar de una manera discrecional en la investigación y persecución de hechos electivos, consintiendo que haya delitos cuyas consecuencias jurídicas puedan eludirse por la aplicación de este principio.³²

Por último, el *análisis criminológico* refleja que los menores infractores se ven menos estigmatizados por su entorno, por la sociedad e incluso por ellos mismos al imponerse medidas que no implican una retribución en sentido estricto, sino que son individualizadas y tienen una finalidad de reeducación y reinserción. Por el contrario, este análisis también refleja que la sociedad sigue siendo desigual y conflictiva no pudiendo llegar a un equilibrio real entre las personas implicadas en el proceso, sino que hay unos intereses que se ven más favorecidos.³³

³⁰ *Ibidem*, pp. 70-73.

³¹ *Ibidem*, pp. 70-73.

³² *Ibidem*, pp. 70-73.

³³ *Ibidem*, pp. 70-73.

2.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

El principio de legalidad como criterio rector del Derecho Penal, también tiene especial transcendencia en el Derecho Penal de Menores. Aparece recogido en el art. 1.1 de la LORPM cuando expresa que esta ley “se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el CP o las leyes penales especiales”. Este principio conlleva que deben estar regulados en las leyes tanto la infracción que comete un sujeto, en este caso el menor, como la consecuencia jurídica que se deriva de la misma, esto es, la sanción correspondiente al delito.³⁴

En la LORPM también se recoge este principio en el artículo 43, diciendo que “no podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma. Tampoco podrán ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita en esta Ley y en los reglamentos que la desarrollen”. El principio de legalidad no sólo abarca la tipificación de la infracción y su sanción correspondiente, sino que también tiene que estar regulado el procedimiento judicial por el que se llegue a dictar sentencia en la que se recoja la medida adoptada, estando la ejecución de la misma también determinada tanto por la LORPM, como por su Reglamento.³⁵

La inserción del principio de legalidad en la LORPM deriva de la propia Constitución Española, que lo alberga en el artículo 25.1 diciendo que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”, procediendo a su vez del art. 9.3 en el que se fija el deber de garantía del principio de legalidad por parte de la Constitución Española.³⁶

³⁴ GUTIÉRREZ I ALBENTOSA, J. M., *El principio de legalidad en la jurisdicción de menores*, Bosch Editor, Barcelona, 2017, pp. 107-120.

³⁵ Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, *Boletín Oficial del Estado*, de 30 de agosto de 2004, nº 209. GUTIÉRREZ I ALBENTOSA, J. M., *El principio de legalidad...*, op. cit., pp. 107-120.

³⁶ GUTIÉRREZ I ALBENTOSA, J. M., *Ibidem.*, pp. 107-120.

Como consecuencia del principio de legalidad formal³⁷ se derivan una serie de garantías que pueden clasificarse con base en cuatro criterios diferentes³⁸:

La *garantía criminal* recoge el principio *nullum crime sine lege*, puede traducirse como “no hay delito sin ley previa”. Una conducta sólo puede ser considerada delictiva cuando haya una ley que expresamente tipifique esa conducta como delito. La ley debe de describir la acción prohibida, la acción delictiva y el núcleo principal de la prohibición.³⁹

La *garantía penal* derivada del principio *nulla poena sine lege* (“ninguna pena sin ley”) exige que las penas asociadas a cada uno de las conductas tipificadas como delitos estén fijadas y determinadas por una ley previa a la comisión de los hechos. Esta garantía se encuentra ciertamente modulada en el Derecho Penal de Menores, en tanto que no va a conocerse la medida que se va a aplicar de una manera previa, sino que la misma va a ser determinada a lo largo del proceso teniendo en cuenta los principios ya explicados previamente.⁴⁰

La *garantía de jurisdicción* supone la necesidad de que la medida acordada para el menor haya sido consecuencia de un proceso que ha respetado todas las garantías procesales y haya sido recogida en sentencia firme dictada por el juez al que correspondía conocer del asunto. Tiene referencia expresa en el artículo 43.1 de la LORPM cuando determina que sólo pueden ejecutarse las medidas establecidas cuando han sido recogidas en sentencia firme dictada de acuerdo al proceso que establece la propia ley.⁴¹

Por último, se deriva la *garantía en la ejecución*, es decir, las medidas tienen que ejecutarse de la manera que la ley establece, y como en el reglamento que la desarrolle, tal y como dispone el artículo 43.2 de la LORPM. Se prohíbe la sustitución de una medida por otra que sea más gravosa durante la ejecución de la misma porque “vulneraría el derecho fundamental a la legalidad penal”.⁴²

³⁷ Como *principio de legalidad formal* se entiende la reserva de ley, esto es, en materia penal sólo se va a poder hacer una regulación sobre los delitos y las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos mediante una ley, no siendo posible su regulación por fuentes con rango inferior a ley (artículo 81 CE).

³⁸ GUTIÉRREZ I ALBENTOSA, J. M., *El principio de legalidad...*, op. cit., p.126.

³⁹ *Ibidem*, pp. 126-134.

⁴⁰ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, op. cit., pp. 74-79.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 74-79.

⁴² GUTIÉRREZ I ALBENTOSA, J. M., *El principio de legalidad...*, op. cit., pp. 126-134.

2.3. PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN

El objetivo y fin del Derecho Penal juvenil y de menores es la de alcanzar la resocialización del menor, esto es, que los menores se reintegren en la sociedad de una manera plena y no estén tentados de realizar de nuevo hechos delictivos.⁴³ Las medidas recogidas en este Derecho Penal especial tienen finalidad socioeducativa para ayudar al menor en el proceso de resocialización o *socialización*, como entiende HIGUERA GUIMERÁ, al considerar que los menores de edad aún no han completado su proceso de madurez y, por tanto, tampoco su proceso de socialización, por lo que no podrían volver a “resocializarse”.⁴⁴

Este principio se encuentra expresamente recogido en el artículo 55 de la LORPM, en sede de “Reglas especiales para la ejecución de las medidas privativas de libertad” en el Capítulo III del Título VII, sobre ejecución de las medidas. El principio de resocialización debe intervenir de manera especial en la ejecución de las medidas privativas de libertad, ya que por su propia naturaleza de “privación de libertad” lleva aparejado un componente de “no socialización” del menor al separarlo de su entorno familiar, social y educativo.⁴⁵

Este artículo establece en su apartado primero que “toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad”. Los centros de internamiento donde se encuentren los menores en cumplimiento de la medida tienen que tratar de paliar los efectos negativos⁴⁶ que se derivan del mismo, favoreciendo para ello el contacto con sus familiares, fomentando sus vínculos sociales.⁴⁷

El artículo 55 de la LORPM debe entenderse relacionado con la orientación reeducadora y de reinserción social que la Constitución Española da a las penas privativas de libertad en el art. 25.2, teniendo especial relevancia en las medidas educativas propias de la Justicia de menores. COLÁS TURÉGANO interpreta que lo que pretende el

⁴³ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, op. cit., p.89.

⁴⁴ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, op. cit., p.394.

⁴⁵ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, op. cit., p.89.

⁴⁶ Artículo 55.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. “En consecuencia, la vida en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para el menor o para su familia, favoreciendo los vínculos sociales, el contacto con los familiares y allegados, y la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas en el proceso de integración social, especialmente de las más próximas geográfica y culturalmente”.

⁴⁷ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, op. cit., p.394.

legislador con estas medidas no es la prevención general de que las personas se abstengan de cometer delitos, sino de manera especial que los menores se rehabiliten y se reinseren en la sociedad intentando corregir las posibles causas que le han llevado a cometer el delito concreto.⁴⁸

2.4. PRINCIPIO DE ESPECIALIZACIÓN

El principio de especialización cobra verdadera importancia dentro de la Justicia de menores, en concreto en el procedimiento penal a seguir con los menores infractores por la necesidad de que las personas que intervienen en el mismo no tengan solo conocimientos penales, sino que deben especializarse en la rama del Derecho Penal de Menores para atender las necesidades que los menores demandan como sujetos especiales en proceso de desarrollo.⁴⁹

El interés superior del menor como base de la Justicia de menores es el que justifica que se cree un procedimiento singular en estos casos y que las personas intervinientes también estén especializadas en esta rama. Los intervinientes en el proceso deben conocer las circunstancias del menor, los objetivos fundamentales de la actuación penal en materia de menores y las posibles medidas aplicables que más se adecuen al menor.⁵⁰

El principio de especialización en Derecho Penal de Menores viene justificado por la Disposición Final Cuarta de la LORPM, en la que se recoge expresamente la necesidad de especialización de los Jueces, Fiscales y abogados, respectivamente. Además, la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica regula también las reformas en materia de personal que tuvieron que realizarse con la entrada en vigor de la ley para que todas las partes intervinientes en el proceso tuvieran una formación adecuada para poder desempeñar de una manera eficaz y eficiente sus funciones como partes en el proceso penal de menores.⁵¹

⁴⁸ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, op. cit., p.89.

⁴⁹ *Ibidem*, p.89.

⁵⁰ ORNOSA FERNÁNDEZ, M^a R., *Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000...*, op. cit., pp.89-94.

⁵¹ *Ibidem*, pp.89-94.

3. MODELOS DE INTERVENCIÓN CON EL MENOR INFRACTOR

3.1. MODELO TUTELAR O ASISTENCIAL

El modelo tutelar, asistencial o de protección de menores es considerado como el primer modelo de justicia penal de menores que difería de la aplicación a éstos del mismo sistema penal que era aplicable a los adultos. El primer Tribunal tutelar de menores se creó en el año 1899, en Illinois, Estados Unidos, extendiéndose por Europa posteriormente. Tuvo gran repercusión desde finales del Siglo XIX hasta la primera mitad del Siglo XX, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento el menor recibía el mismo tratamiento y régimen penal que los adultos, sin tener en cuenta su condición como sujeto en pleno desarrollo personal. El objetivo perseguido con la creación de este modelo fue la sustitución del sistema penal aplicado a los menores por un nuevo “Derecho Correccional” basado en la protección del menor en las situaciones más conflictivas y la tutela del mismo.⁵²

Se crean unos Tribunales tutelares de carácter no represivo, cuya función principal es la de estudiar al menor de acuerdo con su personalidad y entorno para decidir cuál va a ser la medida más idónea para él. No sólo conocen de infracciones penales, sino también de conductas irregulares y de casos en los que los menores están inadaptados o abandonados en la sociedad. Actúan incluso cuando el menor aún no ha cometido ningún hecho delictivo. Al no ser considerado como tribunales con carácter represivo, no es necesaria la presencia del Ministerio Fiscal y, al no haber acusación pública, tampoco resulta necesaria la presencia del abogado defensor del menor.⁵³

Se trata de unos tribunales especiales para jóvenes que no están sometidos directamente al criterio de proporcionalidad, no correspondiéndose la sanción con la gravedad del hecho cometido. Es por ello que gozan de alta discrecionalidad a la hora de determinar la medida concreta, llegando incluso a acordar medidas de duración indeterminada, basándose en el comportamiento del menor.⁵⁴

El Derecho Penal se sustituye por “pedagogía correctiva” mediante la supresión de la imposición de penas y su sustitución por medidas educativas y reformadoras para los menores, evitando que estos tuvieran que comparecer ante los Tribunales penales o, incluso, ir a centros penitenciarios en los que convivirían con adultos infractores. La

⁵² VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil, op. cit.*, pp. 361-367.

⁵³ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil, op. cit.*, pp. 44-51.

⁵⁴ BERNUZ BENEITEZ, M^a J y FERNÁNDEZ MOLINA, E, *Justicia de menores, op. cit.*, pp. 34-35.

delincuencia juvenil se considera como “fruto de la vida en la sociedad urbana” y al menor como una especie de “enfermo” que necesita corregirse antes que ser castigado.⁵⁵

Este modelo parte del positivismo y correccionalismo, considerando al menor infractor como un sujeto con una *anormalidad patológica* derivada de factores biológicos o psicológicos del menor o por influencia del entorno social y familiar que le rodea, el cual le incita a cometer hechos delictivos.⁵⁶ El modelo asistencial parte de la base de que el menor es inimputable por este aspecto y, que por ello las medidas acordadas tienen que tener como objetivo la corrección y reeducación del menor, como ocurre con las amonestaciones, la libertad vigilada o, incluso el breve internamiento.⁵⁷

Se considera que los menores deben ser apartados de su entorno familiar y social para que puedan ser reeducados, lo que justifica que el reformatorio sea la medida protagonista entre aquellas acordadas para los menores. Es la pieza clave todo el sistema tutelar, que mostraba su finalidad preventivo-especial a través de las medidas aplicadas y la creencia de que el menor podía recuperarse, justificando con ello la ausencia de garantías tanto en el procedimiento como en la ejecución de las mismas.⁵⁸

3.2. MODELO EDUCATIVO O DE BIENESTAR

El modelo educativo aparece a finales de los años 40, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento del Estado del Bienestar, extendiéndose hasta finales de la década de los 70. Son también conocidos como modelos “permisivos” o “tolerantes”, precisamente debido a que su finalidad principal es la de alejar a los menores de la Administración de Justicia buscando soluciones extra-judiciales de los conflictos que se produzcan. Los medios más utilizados son la reparación del daño causado y la compensación entre el menor y la víctima.⁵⁹

A diferencia del modelo tutelar, más represivo, el modelo educativo trata la delincuencia juvenil desde una perspectiva educativa y sociológica, teniendo como pilar fundamental la tolerancia. Se configura como un modelo más social del tratamiento de

⁵⁵ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil, op. cit.*, pp. 44-51.

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 44-51.

⁵⁷ VIDAL HERRERO, M^a. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal...*, *op cit.*, p. 113.

⁵⁸ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil, op. cit.*, p. 364.

⁵⁹ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil, op. cit.*, pp. 51-53.

los menores infractores acordando medidas de corte más educativo y familiar en detrimento de aquellas más represivas y punitivas para el menor.⁶⁰

Este modelo basa su concepción en una finalidad educativa también desde el punto de vista procesal. Puede verse en la facultad que poseen tanto la Policía como el Ministerio Fiscal de no comunicar al juez la comisión de un delito por parte de un menor de edad, sino que pueden intentar solucionar el conflicto de forma ajena al Derecho Penal mediante instituciones de carácter civil.⁶¹ Así ocurre en Escocia, donde el sistema de justicia juvenil se centra en la protección social del menor articulada mediante Comités Juveniles (*Children's Panels*) y Audiencias infantiles (*Children's Hearings*), alejando a los mismos de los tribunales penales y acercándolos a estos comités formados por especialistas en juventud. Se tratan de unas instituciones de resolución de conflictos extra-penales donde el menor, sus padres y los miembros de las instituciones discuten sobre los hechos cometidos por éste para adoptar la solución más adecuada al interés superior del mismo.⁶²

Los sistemas educativos no intervienen únicamente cuando los menores cometen hechos penalmente típicos, sino que también actúan en aquellas situaciones en las que los menores realizan conductas irregulares y cuando son inadaptados o abandonados. Es decir, intervienen de manera previa a la posible comisión de una conducta penalmente típica. El procedimiento es informal, restando importancia al respeto de las garantías procesales, y con amplia discrecional para los órganos intervinientes, permitiéndoles adoptar sanciones indeterminadas para los menores. Esto es, la medida adoptada para la reeducación del menor no es delimitada al finalizar el procedimiento, sino que su duración se acomoda a la evolución del menor en el cumplimiento de la medida.⁶³

A diferencia del modelo tutelar, el internamiento supone la *última ratio* en el modelo del bienestar se utiliza para los casos más extremos y las conductas más graves. Las medidas de carácter represivo se sustituyen por aquellas que no suponen el alejamiento entre el menor y su familia y entorno. Si la separación del menor del seno familiar fuese

⁶⁰ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil, op. cit.*, pp. 368-371.

⁶¹ VIDAL HERRERO, M^a. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal...*, *op cit.*, pp. 115-118.

⁶² VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil, op. cit.*, pp. 368-371.

⁶³ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil, op. cit.*, pp. 51-53.

necesaria, se opta por medidas que asemejen el entorno familiar, como son las figuras del acogimiento familiar, residencias de corte familiar o familias sustitutas.⁶⁴

La conclusión a la que llega la doctrina teniendo en cuenta las peculiaridades que caracterizan este sistema y con la prohibición de representación legal del menor es que la Jurisdicción de menores en este modelo tiene carácter civil, no penal. VIDAL HERRERO reflexiona que el modelo educativo en España no tiene prácticamente repercusión, ya que la intervención con el menor se ha basado en un modelo tutelar desde la Ley Tribunales Tutelares de Menores de 1948, que analizaremos posteriormente.⁶⁵

3.3. MODELO DE RESPONSABILIDAD

En la década de los años 80 empieza a surgir un nuevo modelo de tratamiento de la delincuencia juvenil que deja de lado la consideración del menor únicamente como sujeto vulnerable cuyos derechos deben ser garantizados, para dar paso a un sistema de responsabilidad del menor, que considera que no sólo se trata de un sujeto de derechos, sino que también debe cumplir con sus respectivas obligaciones. Surge como respuesta a la crisis de los modelos educativos que son considerados “demasiados permisivos y tolerantes con los menores”.⁶⁶

Los menores dejan de ser considerados como vulnerables o con patologías que les llevan a cometer delitos, sino que se les califica como sujetos de derechos, al igual que los adultos, teniendo que cumplir también con las obligaciones derivadas de los mismos. Para poder ser imputables, los menores van a tener que ser conscientes de la naturaleza penal de los hechos cometidos y de las consecuencias que se derivan de ellos.⁶⁷

Este modelo de responsabilidad sólo va a ser aplicable a los menores delincuentes en cuanto que han cometido un hecho tipificado penalmente como delito, quedando al margen los menores inadaptados y abandonados que sí entraban dentro del ámbito subjetivo de aplicación en los modelos tutelar y educativo.⁶⁸

⁶⁴ *Ibidem*, pp. 51-53.

⁶⁵ VIDAL HERRERO, M^a. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal...*, *op cit.*, pp. 115-118.

⁶⁶ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, *op. cit.*, pp. 54-56.

⁶⁷ *Ibidem*, pp. 54-56.

⁶⁸ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, *op. cit.*, pp. 371-375.

El proceso pasa a ser más garantista y formal, reforzándose así la posición del menor ante la ley y el acercamiento de la Justicia Penal de adultos a los menores en cuanto a garantías y derechos reconocido. El menor pasa a ser considerado como responsable de los hechos cometidos, siendo necesario que el proceso sea contradictorio, en cuanto que es necesario que el menor vaya acompañado de un abogado defensor por la presencia, ahora, de acusación pública ejercida por el Ministerio Fiscal. Los jueces encargados de conocer los asuntos en los que el sujeto activo sea un menor tienen que formar parte de la carrera judicial siendo necesario que estén especializados en materia de menores con conocimientos jurídicos, sociológicos y psicológicos.⁶⁹

El objetivo de este modelo es educar a los jóvenes en la responsabilidad de sus actos buscando un equilibrio entre lo judicial y lo educativo. Los menores son sujetos en pleno desarrollo personal, pero no debe olvidarse que han cometido hechos tipificados penalmente por los que deben responder. Se aprecia menor intensidad en la respuesta penal en tanto que se fomenta la adopción de medidas alternativas, como la reparación y la compensación entre el menor y la víctima. La medida del internamiento del menor se establece como *ultima ratio*, para los delitos más graves y para aquellas situaciones en las que la aplicación del resto de medidas ha fracasado en el objetivo de resocialización del menor. Las medidas adoptadas deben basarse en principios educativos tomando en consideración el criterio de proporcionalidad entre la conducta delictiva cometida y la sanción que corresponde a la misma.⁷⁰

3.4. MODELO MIXTO O DE LAS “4D”

El último de los modelos de Justicia Penal de menores es el modelo mixto o más comúnmente conocido como modelo de las “4D” por su procedencia norteamericana en cuanto que se basa en cuatro principios fundamentales: proceso debido (“due process”), descriminalización (“decriminalization”), desjudicialización (“diversión”) y desinstitucionalización (“desinstitutionalization”). Se trata de un modelo en pleno desarrollo que recibe el nombre de mixto por asumir rasgos y criterios tanto del modelo

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 371-375.

⁷⁰ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil, op. cit.*, pp. 54-56.

de responsabilidad como del educativo. Son sus cuatro rasgos principales los que lo diferencian del sistema de Justicia Penal aplicado a los adultos.⁷¹

3.4.1. Descriminalización.

La descriminalización o despenalización se refiere a la necesidad de disminuir la intervención penal en la Justicia de menores y las consecuencias jurídicas que se derivan de la misma, siendo las medidas que se acuerdan para los menores infractores. Tiene especial inferencia en los *delitos de bagatela* por la menor gravedad de los mismos y en el principio de subsidiariedad del Derecho Penal, en cuanto que debe aplicarse como *última ratio* cuando el resto de sectores del ordenamiento jurídico no han solucionado el problema de manera eficiente.⁷²

Esta descriminalización puede lograrse mediante dos vías: subjetiva y objetiva. La subjetiva hace referencia a la elevación de la edad penal mínima por la que el menor puede ser considerado responsable de los hechos tipificados penalmente en las leyes. Esta decisión es una consideración de política-criminal, que trata de adaptar de una manera más eficiente este modelo y el Derecho Penal a las necesidades sociales de los jóvenes. Por otra parte, desde el punto de vista objetivo se llevaría a cabo a través de la exclusión de la cantidad de hechos tipificados como delictivos en el CP y las leyes especiales, además de la integración de eximentes específicas para menores infractores.⁷³

Es precisamente este principio el que distingue el modelo mixto del modelo de responsabilidad, en cuanto que permite la intervención del Estado a la hora de tener en cuenta la especialidad del menor como sujeto activo que aún no ha cumplido la mayoría de edad penal y el impacto que las conductas cometidas por estos tienen en la sociedad.⁷⁴

⁷¹ GARCÍA PÉREZ, O., “Los actuales principios rectores del Derecho Penal Juvenil: un análisis crítico”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, nº3, Madrid, 1999, pp. 38-39, citado en HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, op. cit., pp. 55-58

⁷² HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, op. cit., pp. 56-68.

⁷³ *Ibidem*, pp. 56-68.

⁷⁴ VIDAL HERRERO, M^a. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal...*, op cit., p. 125.

3.4.2. Desjudicialización.

El principio de la desjudicialización consiste en evitar que el menor infractor se introduzca dentro del sistema de justicia penal con la finalidad de eludir el proceso siempre y cuando se trate de conductas delictivas que no revistan gravedad y se produzcan de manera puntual.⁷⁵

Puede ser realizada a nivel policial, ya que pueden optar por no comunicar los posibles hechos delictivos a la Administración de Justicia cuando consideren que los mismos no tienen apenas repercusión penal ni social. También puede llevarse a cabo a nivel judicial mediante el principio de oportunidad, que permite al Ministerio Fiscal desistir de la acusación a través de la renuncia de la incoación del expediente o el sobreseimiento del asunto, siempre teniendo en cuenta el carácter discrecional de la decisión adoptada por el Ministerio Fiscal.⁷⁶

3.4.3. Desinstitucionalización.

El principio de desinstitucionalización se basa en la sustitución de la medida de privación de libertad en favor de otras medidas alternativas que no supongan el alejamiento del menor de su entorno familiar y social. La medida de privación de libertad queda como último recurso en los casos más graves y siempre tratando de que la misma sea aplicada con la menor duración posible.⁷⁷

Son preferibles medidas de corte más social y educativo como la reparación del daño producido por el menor o la prestación de servicios en favor de la sociedad, que le permite reintegrarse en la misma fomentando la socialización del menor infractor al estar en contacto constante con ella.⁷⁸

⁷⁵ *Ibídem*, p. 124.

⁷⁶ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, op. cit., pp. 56-68.

⁷⁷ *Ibídem*, pp. 56-68.

⁷⁸ *Ibídem*, pp. 56-68.

3.4.4. Proceso debido “due process”.

El proceso debido o justo consiste en la necesidad de que a lo largo del proceso los menores acusados gocen de los derechos y garantías básicas de las que gozan los adultos en el enjuiciamiento de sus actos delictivos.⁷⁹

Internacionalmente el respeto de las garantías procesales se garantiza a través de la CDN y las Reglas de Beijing. Concretamente en el artículo 7, que establece que “en todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior”.⁸⁰

Tanto HIGUERA GUIMERÁ como VIDAL HERRERO consideran que el modelo que adopta la LORPM se basa en esencia en el modelo mixto, en cuanto que incorpora una doble naturaleza sancionadora-educativa en su articulado. Esto queda reflejado a lo largo de la Exposición de Motivos de la ley. Además, se recoge la necesidad de que a lo largo del procedimiento se respeten todas las garantías procesales y constitucionales que le corresponden al menor como sujeto de derechos y obligaciones, buscando la finalidad de reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad. Este objetivo se busca mediante el cumplimiento de una medida que se adapte a las circunstancias personales del menor y que sea proporcional a los hechos delictivos cometidos por el mismo, como ocurre en este modelo, de carácter preventivo-especial.⁸¹

4. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

4.1. Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para niños de 1918.

El régimen de responsabilidad penal para menores que rige actualmente en España ha sido objeto de gran evolución desde los primeros Tribunales de Menores que se crearon en el siglo XX hasta los Juzgados de Menores actuales. Antes de la creación de los

⁷⁹ BERNUZ BENEITEZ, M^a J y FERNÁNDEZ MOLINA, E, Justicia de menores, Síntesis, Vallehermoso, 2018, p. 41.

⁸⁰ Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985.

⁸¹ VIDAL HERRERO, M^a. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal...*, op cit., p. 122. HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, op. cit., p. 68.

primeros Tribunales para niños el tratamiento de los *menores desviados* se caracterizaba por ser un modelo de doble vía en el que los menores infractores iban a la *cárcel* y los huérfanos y vagabundos acudían al *hospicio*.⁸²

Las críticas a la aplicación del régimen penal de adultos a los niños cada vez eran más fuertes, quedando el criterio del “discernimiento” obsoleto para exigir o no responsabilidad a los menores. Los primeros Tribunales para niños en nuestro país se crearon en el año 1920 en Bilbao, amparados por la Ley sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales para niños, promulgada el día 25 de noviembre de 1918 y publicada en la Gaceta de Madrid el día 27 de noviembre del mismo año.⁸³

Por esta ley se creaba un Tribunal especial para niños que estaba integrado por un juez de primera instancia, que ejercía de presidente, y dos vocales nombrados por la Junta Provincial de Protección a la Infancia que estuviesen capacitados para desempeñar el cargo por sus conocimientos especializados en infancia y pedagogía, sin ser este cargo retribuido. Quedaban amparados por la ley los menores de 15 años, siendo competentes los Tribunales para privar de la patria potestad a los padres que hubiesen abandonado a sus hijos o para decretar la libertad vigilada de los menores cuando los delitos cometidos fueran de escasa gravedad. El Decreto-ley de 15 de julio de 1925 amplió el régimen de protección hasta los menores de 16 años y cambió la denominación del Tribunal a “tutelares para niños” en lugar de “especiales”.⁸⁴

La creación de los Tribunales de niños en el resto de España fue retrasada por la necesidad de la existencia previa de establecimientos especializados en la observación y educación de los niños infractores y abandonados antes de la creación de los tribunales especializados, tal y como establecía el artículo 1 de la ley. La consecuencia de este retraso en la creación de Tribunales para niños fue la existencia de dos regímenes jurídicos en España. Por un lado se aplicaba el CP y la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los menores infractores y, por otro lado, se aplicaba el régimen jurídico especializado, dependiendo de la existencia o no de tribunales específicos en cada territorio. Se puso fin a la desigualdad territorial creada con la entrada en vigor del nuevo CP de 1932, que en

⁸² GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M., “Los Tribunales para niños: creación y desarrollo”, *Historia de la creación: Revista universitaria*, nº 18, 1999, pp.113-124.

⁸³ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, op. cit., pp. 59-60.

⁸⁴ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M., op. cit., pp.113-124.

su artículo 8.2 recogía la aplicación de la legislación especial a los menores aun cuando no existiera aún un Tribunal de niños.⁸⁵

4.2. Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948.

Las sucesivas modificaciones de la Ley de 1918 dejaron patente la necesidad de reformar el régimen penal aplicable a los menores de edad, surgiendo así la Ley de 1948, de Tribunales Tutelares de Menores mediante Decreto de 11 de junio de 1948 (LTTM en adelante). Los tribunales tutelares de menores poseían competencia en protección y reforma hasta que esta competencia fue transferida a las Comunidades Autónomas en el año 1985.⁸⁶

Los tribunales tutelares de menores se caracterizaban por ser un organismo autónomo y colegiado desvinculado de la Administración de Justicia. Estos tribunales estaban compuestos por un presidente, un vicepresidente, dos vocales y un secretario. El único cargo retribuido era el del presidente (juez), siempre y cuando tuvieran mayor volumen de trabajo por en el lugar donde desempeñaban el cargo.⁸⁷

La competencia de estos tribunales estaba regulada en el artículo 9 de la LTTM que distinguía tres facultades:⁸⁸

- a) *Reformadora*. Permitía imponer medidas tutelares a los menores de 16 años, sin límite de edad inferior, por la comisión de conductas constitutivas de delito o falta en el CP.
- b) *Represiva*. Son también competentes para conocer de los actos delictivos cometidos por mayores de 16 años de manera excepcional.
- c) *Protectora*. Eran competentes de la protección jurídica de los menores de 16 años contra “el indigno ejercicio del derecho a la guarda y educación”, es decir, aquellas situaciones en las que los menores eran víctimas de malos tratos por parte de los adultos responsables o no atendían a su educación y cuidado.⁸⁹

⁸⁵ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, op. cit., pp. 59-60.

⁸⁶ *Ibidem*, pp. 60-62.

⁸⁷ *Ibidem*, pp. 60-62.

⁸⁸ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, op. cit., pp. 163-173.

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 163-173.

El aspecto más característico de la LTTM es el *principio de ausencia de formalismo en el procedimiento*. El artículo 15 de la ley establecía la ausencia de publicidad tanto en la fase de instrucción como de enjuiciamiento, además de la no sujeción de los Tribunales a las reglas procesales que estuvieran vigentes en el resto de jurisdicciones. La exclusión de las garantías procesales recogida en el artículo 15 fue objeto de diversas críticas por los propios jueces de menores, que plantearon una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que dictaminara la adecuación o no de la LTTM a la Constitución Española (CE en adelante).⁹⁰

El Tribunal Constitucional (TC en adelante) declaró inconstitucional la LTTM en la Sentencia 36/1991, de 14 de febrero, en concreto por la exclusión de la aplicación de garantías procesales recogida en el artículo 15 de la ley. El TC parte de la “absoluta y total inconstitucionalidad de la ley por su contradicción con la Norma Fundamental”, siendo el precepto vulnerado el artículo 24 CE, que regula el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso debido, con todas las garantías.⁹¹

El artículo 15 de la LTTM supone la privación de las garantías establecidas en el artículo 24 CE⁹² por el “carácter educativo y tutelar de la Jurisdicción de menores” que no es justificable por tal fin y que, como señala el TC “infringe lo dispuesto en los Tratados Internacionales ratificados por España y las garantías contenidas en el art. 24 CE. para todo tipo de proceso, así como los principios de seguridad jurídica (art. 9.3 CE.) e igualdad (art. 14 CE.)”.⁹³

El TC considera que se trata de un *proceso inquisitivo* y recoge la *imperiosa necesidad* de reformar la legislación tutelar de menores.⁹⁴ Por otra parte, el TC mantiene que no todos los principios y garantías de los procesos contra adultos deben garantizarse en los

⁹⁰ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, op. cit., pp. 59-60.

⁹¹ CANTARERO BANDRÉS, R., “Los menores y el Derecho Penal”, *Derecho Privado y Constitución*, nº 7, 1995, pp. 15-17.

⁹² Artículo 24 Constitución Española. “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

⁹³ STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5º.

⁹⁴ STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 6º. “Hemos de subrayar la imperiosa necesidad de que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Cortes procedan a reformar la legislación tutelar de menores”.

mismos términos para menores, refiriéndose al principio de publicidad, que no rige en la Jurisdicción de menores para otorgarle un carácter más íntimo y privado al menor infractor.⁹⁵

4.3. Ley Orgánica 4/1992, sobre reforma de la Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento ante los Juzgados de Menores.

La Ley Orgánica 4/1992 es fruto de la urgente necesidad de adaptar el sistema de justicia de menores a las exigencias constitucionales dictadas en la STC 36/1991, de 14 de febrero. Lo más destacado es que la propia Exposición de Motivos hace referencia a dicha sentencia cuando establece que ésta “hace necesaria la regulación de un proceso ante los Juzgados de Menores que, no obstante, sus especialidades por razón de los sujetos del mismo, disponga de todas las garantías derivadas de nuestro ordenamiento constitucional”.

La ley recoge varias novedades destacables. En primer lugar, el Ministerio Fiscal es quien debe llevar a cabo la iniciativa e investigación de los actos delictivos, siendo el Juez competente para acordar la terminación del proceso e incluso la suspensión del fallo. En segundo lugar, el Ministerio fiscal debe velar por la defensa de los derechos, el cuidado de la integridad física y psicológica del menor y el respeto por las garantías a lo largo del proceso. Por último, se establece una duración máxima de dos años para todas las medidas con finalidad educativa, como son la amonestación, la libertad vigilada, el acogimiento por otra persona o núcleo familiar o la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad.⁹⁶

CANTARERO BANDRÉS cita al Consejo General del Poder Judicial que señaló que esta ley “ha rodeado al menor de las garantías fundamentales reconocidas a los delincuentes adultos y le ha aplicado reglas del Derecho Penal ordinario”.⁹⁷

Debe tenerse en cuenta que esta ley se promulgó con “carácter provisional” por la necesidad de una reforma urgente de la LTTM de 1948. Su pretensión era comenzar un

⁹⁵ CANTARERO BANDRÉS, R., *op. cit.*, pp. 15-17.

⁹⁶ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, *op. cit.*, pp. 63-65.

⁹⁷ CGPJ Informe sobre el Anteproyecto de Ley Penal Juvenil y del Menor. Documento dactilografiado, p. 7. Citado en CANTARERO BANDRÉS, R., *op. cit.*, p. 17.

proceso de renovación de la legislación de menores que culminaría la LO 5/2000 y sus posteriores reformas.⁹⁸

5. LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

La LORPM parte del mismo supuesto de hecho que el CP para exigir responsabilidad. Por tanto, se exigirá responsabilidad penal a las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el CP o las leyes penales especiales.

Sin embargo, a diferencia del régimen de penas que caracteriza al sistema de responsabilidad penal de los adultos, la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un ilícito penal por un menor de edad es la adopción de una medida de carácter sancionadora-educativa. Las medidas susceptibles de imposición a los menores de edad se recogen a modo de catálogo en el artículo 7 de la LORPM, ordenadas de mayor a menor restricción de derechos. Estas medidas pueden clasificarse y agruparse en función de su naturaleza:⁹⁹

a) Medidas privativas de libertad:

- a. Internamiento en régimen cerrado.
- b. Internamiento en régimen semi-abierto.
- c. Internamiento en régimen abierto.
- d. Permanencia de fin de semana.

b) Medidas restrictivas de libertad:

- a. Libertad vigilada.

c) Medidas privativas de otros derechos:

- a. Prohibición de aproximarse o comunicarse.
- b. Prestaciones en beneficio de la comunidad.
- c. Privación de determinados derechos.
- d. Inhabilitación absoluta.

⁹⁸ Las reformas legislativas aplicadas a la LO 5/2000 se han realizado a través de la LO 7/2000, de 22 de diciembre; LO 9/2000, de 22 de diciembre; LO 9/2002, de 10 de diciembre; LO 15/2013, de 25 de noviembre; y LO 8/2006, de 4 de diciembre. CANTARERO BANDRÉS, R., *op. cit.*, p. 13-17.

⁹⁹ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, *op. cit.*, pp. 222-241.

d) *Medidas terapéuticas:*

- a. Internamiento terapéutico en régimen cerrado.
- b. Internamiento terapéutico en régimen semi-abierto.
- c. Internamiento terapéutico en régimen abierto.
- d. Tratamiento ambulatorio.

e) *Medidas educativas:*

- a. Asistencia a un centro de día.
- b. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
- c. Realización de tareas socioeducativas.
- d. Amonestación.¹⁰⁰

5.1. EL CONCEPTO DE MENOR Y DETERMINACIÓN DE LA EDAD

El conjunto de los textos nacionales e internacionales coinciden en la determinación de los 18 años como la edad a partir de la cual una persona tiene la suficiente madurez para poder ejercer conscientemente los derechos que le son inherentes y cumplir con las obligaciones que el ordenamiento jurídico les impone como sujetos de derecho y de derechos.¹⁰¹

En el ámbito internacional, la CDN define en el su artículo 1 al *niño* como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad” con la excepción de que la ley que le sea aplicable considere una edad diferente. Las Reglas de Beijing en el artículo 2 disponen que debe considerarse como *menor* a “todo niño o joven que puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto con arreglo al sistema jurídico respectivo”. Y, por tanto, *menor delincuente* será “todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito”.

En el ámbito nacional, el artículo 12 de la Constitución Española establece que “los españoles son mayores de edad a los 18 años”. También el Código Civil recoge la mayoría de edad, disponiendo en el artículo 315 que la mayoría de edad comienza cumplidos los 18 años.

¹⁰⁰ MONTERO HERNANZ, T., *La justicia juvenil en España. Comentarios y reflexiones*, La Ley, Las Rozas, 2009, pp. 291-313.

¹⁰¹ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, op. cit., pp. 123-126.

Sin embargo, el Derecho Penal elude a lo largo de su historia el criterio utilizado por la normativa nacional e internacional. El CP de 1822 declaraba exentos de responsabilidad penal a los menores de 7 años, pero a partir de esa edad podían ser responsables penalmente cuando se probara que el menor era consciente del carácter delictivo de sus actos. La regla del discernimiento obraba hasta los 17 años de edad, aplicándose para estos sólo un atenuante por minoría de edad. Con los Códigos Penales posteriores de 1848 y 1870 ocurría lo mismo, salvo que la edad se elevó a los 9 años. No es hasta el CP de 1928, que eleva la mayoría de edad penal a los 16 años, cuando se tiene en consideración que los menores de edad no pueden ser tratados de manera idéntica a los adultos porque son sujetos en pleno desarrollo personal y social, cuya especialidad no puede ser tomada en cuenta únicamente mediante la aplicación de un atenuante.¹⁰²

El vigente CP de 1995, con las modificaciones posteriores, elevó la mayoría de edad penal a los 18 años de edad igualándola con el resto de los sectores del ordenamiento jurídico. Así, el artículo 19 del CP dispone que “los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor”.¹⁰³

La elevación de la mayoría de edad penal a los 18 años es una decisión de política criminal que tiene su base en la certeza de que los menores infractores deben ser tratados de manera diferente a los adultos en el ámbito penal. Además, es necesario prestar más atención a las necesidades de los menores para que no vuelvan a delinquir debiendo aplicar un sistema que se base en la prevención especial.¹⁰⁴

El régimen especial de responsabilidad penal de los menores de edad recogido en la LORPM se aplica, por tanto, a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el CP o las leyes penales especiales, como dispone el artículo 1 de la Ley.

Podemos distinguir tres intervalos de edad en los que el régimen de responsabilidad penal es distinto al que se exige para los adultos: 1) los menores de 14 años; 2) los mayores de 14 años y menores de 18 años; y 3) los mayores de 18 años y menores de 21 años.

¹⁰² ORNOSA FERNÁNDEZ, M^a R., *Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000...*, *op. cit.*, pp.29-32.

¹⁰³ *Ibidem*, pp. 29-32.

¹⁰⁴ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, *op. cit.*, pp. 308-312.

5.1.1. Los menores de 14 años.

El artículo 1 de la LORPM determina que los menores de 14 años de edad no responden penalmente de los hechos tipificados como delictivos en el CP y las leyes especiales. La LORPM aplica un criterio biológico o cronológico de inimputabilidad de los menores, en tanto que sólo por el hecho de ser menor de 14 años se considera que no están en condiciones de comprender los actos delictivos que realizan, su naturaleza antijurídica y las consecuencias que se derivan de los mismos. Se trata de una presunción *iuris et de iure* que considera a los menores de 14 años inimputables independientemente del grado de madurez o discernimiento que presenten, aportando seguridad jurídica al régimen de responsabilidad penal de los menores de edad.¹⁰⁵

Se trata de una decisión de política-criminal que tiene en cuenta las características especiales del sujeto activo, por encontrarse en una etapa de pleno desarrollo personal. El límite de los 14 años viene reforzado porque a partir de esa edad los menores ya tienen “formación esencial por haber realizado la enseñanza básica”.¹⁰⁶ La edad de 14 años marca el límite entre la etapa de la niñez y la de la adolescencia, siendo la finalidad de la LORPM la de “dejar fuera del Derecho Penal al niño y someter al adolescente o joven a una respuesta penal, pero especializada (sanción educativa)”.¹⁰⁷

Se toma esta edad con el convencimiento de que las infracciones cometidas por los menores de esa edad “son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado”.¹⁰⁸

Si una persona menor de 14 años comete un ilícito penal habrá que aplicar lo dispuesto en el artículo 3 de la LORPM, que dispone que a estos sujetos “no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las

¹⁰⁵ JIMÉNEZ DÍAZ, M^a. J., “Menores y responsabilidad penal: el debate se reabre”, *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, n° 49, 2015, pp. 168-171.

¹⁰⁶ *Ibidem*, pp. 168-171.

¹⁰⁷ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, *op. cit.*, pp. 308-312.

¹⁰⁸ JIMÉNEZ DÍAZ, M^a. J., “Menores y responsabilidad...”, *op. cit.*, pp. 168-171.

normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes”.¹⁰⁹

A pesar de la consideración de inimputable de los menores de 14 años, el artículo 3 también recoge que el Ministerio Fiscal debe remitir a la entidad pública de protección de menores los testimonios de los particulares que considere necesarios respecto al menor para valorar cuál es la situación del mismo y si hay necesidad o no de impulsar la adopción de medidas de protección adecuadas a las circunstancias del menor conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Serán las Comunidades Autónomas las que en el ejercicio de sus competencias asuman la guarda del menor o ejerzan la tutela legal cuando se encuentren desamparados. Tienen que actuar para proteger al menor conforme dicta la ley.¹¹⁰

5.1.2. Los mayores de 14 y menores de 18 años.

Como ya se ha explicado, la LORPM se aplica a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho que hayan cometido hechos tipificados como delitos o faltas en el CP o las leyes penales especiales. A partir de los 14 años se puede exigir responsabilidad penal al menor, aunque esta responsabilidad va a ser distinta a la de los adultos. Se trata de una responsabilidad especial.¹¹¹

El mandato recogido en el artículo 19 del CP por el que los menores de 18 años no responden penalmente no puede considerarse como una exención genérica ni absoluta de responsabilidad. el propio artículo remite a la ley especial por la que se regulará la responsabilidad penal de menores y por la que, en su caso, deberán responder los menores de edad por sus actos ilícitos.¹¹²

La imputabilidad o inimputabilidad de los menores incluidos en esta franja de edad es un tema muy discutido por la doctrina, ya que está dividida entre los que los consideran imputables o inimputables. JIMÉNEZ DÍAZ considera que los menores entre los 14 y los

¹⁰⁹ *Ibidem*, pp. 168-171.

¹¹⁰ COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, *op. cit.*, p. 127.

¹¹¹ JIMÉNEZ DÍAZ, M^a. J., “Menores y responsabilidad...”, *op. cit.*, pp. 170-175.

¹¹² *Ibidem*, pp. 170-175.

18 años son “perfectamente imputables, aunque la responsabilidad adquiriera una forma especial por razón del sujeto al que se le aplica”.¹¹³

Por el contrario, MUÑOZ CONDE mantiene que los menores “son inimputables, aunque responsables del hecho delictivo cometido de una manera distinta y esa situación se justifica por el hecho de tener un tratamiento penal diferenciado de los adultos”.¹¹⁴

Ante este problema, ORNOSA FERNÁNDEZ razona que “sería muy forzado atribuir a un menor la realización de un hecho delictivo tipificado en el CP si realmente no tiene esa capacidad de conocer el sentido del mandato y actuar conforme a ello porque carece de suficiente madurez”.¹¹⁵

Dentro del intervalo de edad de los 14 a los 18 años hay un tratamiento diferenciado en las medidas acordadas para el menor en función de la edad que haya alcanzado:¹¹⁶

- a) El artículo 10.1.a) establece un máximo de duración de tres años de las medidas cuando el menor tiene entre catorce o quince años de edad en el momento de comisión de los hechos. Si se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, el límite máximo será de ciento cincuenta horas, y si se trata de la medida de permanencia de fin de semana, la duración límite será de doce fines de semana. Además, el artículo 10.2.a) recoge un régimen especial para los casos en los que “el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del CP, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años”, debiendo imponer el juez una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.¹¹⁷
- b) Cuando el menor infractor tuviere dieciséis o diecisiete años en el momento en el que cometió los hechos, el artículo 10.1.b) establece una agravación de la

¹¹³ *Ibídem*, pp. 170-175.

¹¹⁴ MUÑOZ CONDE, F., *Derecho penal. Parte general*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 363-366.

¹¹⁵ ORNOSA FERNÁNDEZ, M^a R., *Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores*, Bosch, Comte d’Urgell, 2003.

¹¹⁶ HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil, op. cit.*, pp. 312-320.

¹¹⁷ JERICÓ OJER, L., “El impacto (probablemente no previsto) de la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo en el Derecho penal de menores”, *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, n° 20, 2018, pp. 42-47.

duración máxima de la pena, que será de seis años o de doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o permanencia de dieciséis fines de semana. Además, “cuando el hecho revista extrema gravedad, el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de cinco años”. También se agrava en los supuestos recogidos en el artículo 10.2 ya nombrados, subiendo el límite por la medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, que, en su caso, será complementada por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años.

5.1.3. Los mayores de 18 y menores de 21 años.

El artículo 69 del CP permite que al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo se le aplique las disposiciones de la ley que regula la responsabilidad penal del menor, condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos y a que se trate de uno de los casos en los que la ley permita este cambio de régimen.

A pesar de que la actual redacción del artículo 1 de la LORPM, la original de la ley establecía la posibilidad de aplicar este régimen también a las personas comprendidas entre las edades de 18 y 21 años, a los que el artículo 1.4 denominaba *jóvenes*. En virtud del artículo 4, el juez instructor podía dictar a través de auto la posibilidad de aplicar la LORPM para los jóvenes tras haber oído las opiniones del Ministerio Fiscal, del abogado del menor y del equipo técnico.¹¹⁸

El artículo 4 recogía una serie de requisitos específicos que tenían que concurrir para aplicar este régimen:

1. El delito cometido tenía que ser una falta (ya inexistentes) o un delito menos grave, siempre y cuando no hubiera violencia o intimidación hacia las personas, o no hubiera grave peligro para su vida o integridad física.
2. El joven no tenía que haber sido condenado por sentencia firme después de haber cumplido los 18 años.

¹¹⁸ COLÁS TURÉGAÑO, A, *Derecho penal de menores*, op. cit., p. 130.

3. El equipo técnico tenía que dar su opinión favorable a la aplicación del régimen de responsabilidad penal de menores.¹¹⁹

Esta posibilidad nunca llegó a entrar en vigor, ya que tanto la Ley Orgánica 9/2000 como la Ley Orgánica 9/2002 declararon esta opción en suspenso. Finalmente, la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores derogó la posibilidad de la aplicación de la LORPM para los jóvenes.¹²⁰

6. JUSTICIA RESTAURATIVA Y DERECHO PENAL DE MENORES.

6.1. Concepto y fundamento

La justicia restaurativa nace como un nuevo modelo de justicia y un novedoso método de resolución de conflictos que sienta sus bases en la participación, la comunicación y el diálogo y la voluntariedad de las partes de someterse a este modelo de justicia.¹²¹

La justicia restaurativa surge con la corriente político-criminal a favor de la víctima y de la importancia que tiene la misma dentro del proceso penal como parte interviniente en el mismo. No hay una definición unánime de “justicia restaurativa” debido a la existencia de diferentes modelos de la misma y la discusión doctrinal que hay sobre su concepto. El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas define la justicia restaurativa como "cualquier proceso en el que la víctima y el delincuente y, si fuera procedente, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad afectados por el delito, participan juntos y activamente en la resolución de las cuestiones generadas por el delito, generalmente con ayuda de un facilitador. Los procesos restaurativos pueden incluir mediación, conciliación, conferencias y círculos de sentencia".¹²²

La finalidad de la justicia restaurativa reside en la reparación del daño, es decir, el menor debe asumir la responsabilidad de los actos que ha cometido y tiene que comprometerse a reparar el daño causado, tratándose de un método de resolución del

¹¹⁹ BERNUZ BENEITEZ, Mª J y FERNÁNDEZ MOLINA, E, *Justicia de menores*, op. cit., pp. 168-170.

¹²⁰ *Ibidem*, pp. 168-170.

¹²¹ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, op. cit., pp. 375-377.

¹²² BERNUZ BENEITEZ, Mª. J., “Las posibilidades de la justicia restaurativa en la justicia de menores (española)”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología* (en línea), nº 16-14, 2014, pp. 14:3-14:8. Definición tomada del *Manual sobre programas de justicia restaurativa* elaborado por Naciones Unidas en 2006. Disponible en https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf

conflicto igual de beneficioso para el menor infractor como para la víctima. No sólo prima el interés superior del menor, sino que el interés de la víctima también pasa a ser prioritario en la justicia restaurativa.¹²³

La justicia restaurativa se basa en el respeto a la dignidad de todas las partes que han resultado afectadas por los hechos delictivos cometidos, sirviendo de fundamento para los principios que caracterizan este modelo de justicia. Es necesaria la participación e implicación de todas las partes afectadas por el delito para identificar cuál ha sido el daño causado y cómo puede repararse el mismo. La reparación no sólo busca compensar a la víctima, sino que también tiene una función pacificadora dentro del Derecho Penal a través del restablecimiento de la situación concreta que ha sido alterada.¹²⁴

Además de la reparación a la víctima requiere que el autor del delito se arrepienta de los actos delictivos cometidos y asuma la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. A diferencia del sistema clásico penal que se basa en el *ius puniendi* del Estado, en este modelo es necesario que tanto el autor del delito como la víctima se sometan voluntariamente a este proceso, fomentando el diálogo y negociación para llevar a cabo la reparación. Finalmente, la justicia restaurativa pretende reeducar a la persona que delinque para poder reintegrarlo en la sociedad de manera que ésta se vea reforzada y contribuya al mantenimiento de la paz social y a prevenir la reincidencia.¹²⁵

La LORPM abre la posibilidad a este nuevo modelo de justicia en el Fundamento 13 de su Exposición de Motivos en la que otorga especial interés a la reparación del daño causado y la conciliación entre el menor infractor y la víctima. Lo fundamenta en los principios de intervención mínima y de oportunidad que inspiran la responsabilidad penal del menor en la ley.¹²⁶

La Exposición de Motivos de la LORPM recoge expresamente que “la reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico iniciado por su causa”.

¹²³ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, op. cit., pp. 375-377.

¹²⁴ GORDILLO SANTANA, L. F., *La justicia restaurativa y la mediación penal*, Iustel, Paracuellos de Jarama, 2007, pp. 69-76.

¹²⁵ *Ibidem*, pp. 69-76.

¹²⁶ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, op. cit., pp. 375-377.

La justicia restaurativa puede encontrar una vía dentro de la justicia de menores debido a que ambas comparten principios base como la responsabilización del menor por el delito y la reinserción del mismo en la sociedad. El principal problema que encuentra es la incorporación de la víctima como parte en un sistema de justicia que tiene como máxima la búsqueda del interés superior del menor.¹²⁷

A pesar de la prevalencia del interés superior del menor sobre el resto de principios en juego, en la jurisdicción especializada de menores se está abriendo camino a tomar en consideración otros intereses, como puede ser el de la víctima, a la hora de adoptar una solución extrajudicial del conflicto desistiendo del expediente por parte del Ministerio Fiscal, como recoge el Real Decreto 1774/2004.¹²⁸ Además, el Comité de los Derechos del Niño mantiene que, a pesar de que la búsqueda del interés superior del menor debe tener importancia fundamental y ser prioritario, “no es el único factor que debe tenerse en consideración en la actuación de las instituciones, las autoridades y la administración”.¹²⁹

6.2. Mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales de conflictos

La *mediación* es un método autocompositivo de resolución de conflictos, en tanto que son las propias partes las que acuerdan una solución con la ayuda de un tercero, que será el mediador. Se trata de un proceso a través del cual las partes que están enfrentadas en un conflicto deciden de manera voluntaria buscar una solución al problema con la ayuda de un mediador.¹³⁰

El Consejo de Europa define la mediación penal en la Recomendación núm. R (99) 19 como “todo proceso que permite a la víctima y al delincuente participar activamente,

¹²⁷ BERNUZ BENEITEZ, M^a. J., “Las posibilidades de la justicia restaurativa en la justicia de menores (española)”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología* (en línea), nº 16-14, 2014, pp. 14:15-14:17.

¹²⁸ Artículo 5.1. a) del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. “Si el Ministerio Fiscal, a la vista de las circunstancias concurrentes o a instancia del letrado del menor, apreciara la posibilidad de desistir de la continuación del expediente, solicitará del equipo técnico informe sobre la conveniencia de adoptar la solución extrajudicial más adecuada al interés del menor y al de la víctima”.

¹²⁹ Observación general N° 12, sobre el derecho del niño ser escuchado, del Comité de los Derechos del Niño, de 20 de julio de 2009, párrafo 71.

¹³⁰ ÁLVAREZ RAMOS, F., “Mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *International e-Journal of Criminal Science*, art. 3, nº 2, 2018, pp. 4-8.

si libremente acceden, en la solución de las dificultades resultantes del delito, con ayuda de un tercero independiente, el mediador”.¹³¹

En el ámbito penal de menores, las partes implicadas serán la víctima y el menor autor del delito que, con la ayuda del tercero mediador, buscarán poner fin al conflicto producido como consecuencia del hecho delictivo, acordando cuál es la reparación idónea del daño causado. Se trata de un “modelo idóneo” para el sistema de justicia de menores por su carácter pedagógico, flexible y menos represivo para el menor infractor, al no tratarlo como un delincuente.¹³²

En el artículo 19 de la LORPM se recoge la posibilidad de adoptar un modelo de mediación o reparación entre el menor infractor y la víctima como solución extrajudicial conflicto. La ley considera la mediación como un medio para llegar a la conciliación o reparación entre el menor y la víctima, regula un medio con el fin de obtener un resultado jurídico concreto. Tanto la LORPM como el Reglamento que la desarrolla regulan el proceso de mediación como solución extrajudicial que tiene su fundamento en el principio de intervención mínima. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como el Juez de Menores deben revisar cómo se ha llevado a cabo el procedimiento y si se han cumplido las garantías para poder considerarlo válido.¹³³

No cabe olvidar que los sistemas de solución extrajudiciales de conflictos sólo caben para aquellos delitos calificados como leves y menos graves en el CP, cuando no se aprecie violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos. No todos los menores infractores van a poder acogerse a este método de solución extrajudicial, sino que dependerá de la gravedad del delito cometido.¹³⁴

El artículo 19 de la LORPM también recoge la posibilidad de solucionar el conflicto a través de la *conciliación*, entendiendo la misma como el procedimiento por el cual el menor se arrepiente del daño causa estando dispuesto a disculparse. Tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica por parte del menor infractor, como recoge la Exposición de Motivos de la LORPM. Es necesario que concurran una serie de

¹³¹ TORRADO TARRÍO, C., “Mediación en el derecho penal de menores: nuevos retos y realidades”, *Una mirada hacia la Justicia Restaurativa: recuperando del derecho perdido*.

¹³² ÁLVAREZ RAMOS, F., “Mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *International e-Journal of Criminal Science*, art. 3, nº 2, 2018, pp. 4-8.

¹³³ *Ibídem*, pp. 4-8.

¹³⁴ TORRADO TARRÍO, C., “Mediación en el derecho penal de menores: nuevos retos y realidades”, *Una mirada hacia la Justicia Restaurativa: recuperando del derecho perdido*.

requisitos para que se produzca la conciliación: el hecho imputado al menor debe constituir un delito leve o menos grave; no debe mediar violencia o intimidación grave en la comisión de los hechos valorándose por el Ministerio Fiscal; y, por último, la víctima debe aceptar las disculpas que el menor le ofrece. Por tanto, el menor debe responsabilizarse de los hechos previamente, asumir la comisión de los mismos, arrepentirse de haberlos realizado y pedir perdón a la víctima. Por ello es considerada como una de las formas de reparación del daño más reeducativas para el menor y satisfactoria para la víctima, en cuanto que observa el arrepentimiento del menor y puede ver reparado el daño causado.¹³⁵

En la *reparación*, al contrario, no sólo se alcanza el acuerdo mediante la satisfacción psicológica como ocurre en la conciliación, o con el compromiso de reparar el daño, sino que es necesario que el menor cumpla con la reparación del daño causado a la víctima. La reparación del daño puede realizarla a través de trabajos en beneficio de la comunidad o mediante acciones adaptadas a sus necesidades, buscando siempre que la víctima o perjudicado obtenga un beneficio.¹³⁶

La reparación puede realizarse de manera directa a la víctima o por vía indirecta. La reparación directa a la víctima, recogida en el artículo 19 de la LORPM, consiste en la realización por parte del menor de alguna actividad que suponga un beneficio para ésta. La reparación indirecta se lleva a cabo mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad o actividades educativas que contribuyan en la resocialización del menor. También se da en los casos en los que se desconoce la víctima o no quiere aceptar la reparación, siempre y cuando el menor haya asumido su responsabilidad por la realización de los hechos y esté dispuesto a reparar el daño causado.¹³⁷

Cabe destacar que al igual que ocurre con los adultos, los menores infractores sólo pueden realizar trabajos en beneficio de la comunidad cuando den su consentimiento expreso a esta prestación debido al carácter voluntario de los mismos y la prohibición de la imposición de la realización de trabajos a los menores, como recoge el artículo 7.1. k) de la LORPM. Esta medida consiste en la realización de actividades no retribuidas por el

¹³⁵ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, op. cit., pp. 380-382.

¹³⁶ *Ibidem.*, pp. 387-389.

¹³⁷ ÁLVAREZ RAMOS, F., “Mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *International e-Journal of Criminal Science*, art. 3, nº 2, 2018, pp. 15-20.

menor en favor de personas que se encuentren en situación de precariedad, relacionadas en la medida de lo posible con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los éste.¹³⁸

7. CONCLUSIONES

1. Como hemos observado, el Derecho Penal de Menores es un sector del ordenamiento jurídico especial dentro del Derecho Penal pero que, como tal, debe respetar todos los principios que lo inspiran tanto en el ámbito material como en el aspecto procesal con el fin de garantizar el respeto de todos los derechos del menor infractor a la hora de determinar la medida más adecuada para el mismo. Cobra especial relevancia el respeto al principio del “interés superior del menor” como prioritario, como recoge la Exposición de Motivos de la LORPM.

Precisamente, es el principio del interés superior del menor, junto con el principio de oportunidad y el de intervención mínima, el que permite al Fiscal valorar la continuación o no de la incoación del expediente o del proceso, teniendo la facultad de no sobreseer el asunto en los delitos que no revistan apenas gravedad. Se trata de una actuación muy favorable para el menor, que permite que el mismo no sea estigmatizado al no tener que enfrentarse a un tribunal ni ser considerado como un “menor delincuente” cuando los actos sean prácticamente anecdóticos.

2. En cuanto a los modelos de intervención con el menor infractor, cada uno de ellos revisten de unas características que los diferencian y los individualizan del resto. Desde el modelo tutelar hasta el modelo de las “4D” se ha ido modulando la protección a los menores infractores tanto en la edad por la que pueden ser considerados responsables penalmente, como en las garantías que deben respetarse a lo largo del proceso para que el menor comprenda el porqué de la medida acordada para él y cómo ésta puede ayudarle en la tarea educativa y resocializadora.
3. En la evolución legislativa de la Justicia de menores ha quedado patente cómo partiendo de una regulación casi sin garantías ni atención a los menores en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para niños de 1918 pasamos a una regulación más especializada, completa y garantista con la protección de menores que rige en la actual LORPM. Uno de los hitos más importantes que ayudó en este

¹³⁸ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil, op. cit.*, pp. 380-382.

proceso fue la STS 36/1991, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional la LTTM por recoger un “proceso inquisitivo” para los menores infractores.

4. Dentro de la LORPM el aspecto más relevante es el del concepto de menor para entender cuál es el régimen de responsabilidad para los menores de edad y por qué se exige un tipo u otro de responsabilidad penal en función de su edad. Entiendo que la edad de 14 años es una edad adecuada para que los menores respondan por la comisión de sus actos delictivos, ya que han alcanzado una madurez por la cual sí pueden y son conscientes de la naturaleza de sus actos. Además, la posibilidad de aplicar la LORPM a los jóvenes de 18 a 21 años que recoge el artículo 69 del CP (aunque la LO 8/2006 acabó con esa posibilidad) reviste cierto interés por introducir una cláusula que permita considerar a determinados mayores de edad, como menores a la hora de exigir la responsabilidad de sus actos, en función de la gravedad de los mismos y las características personales del joven.
5. Por último, la integración de la justicia restaurativa dentro del Derecho Penal de Menores puede ser un buen método de afianzar el carácter resocializador y educativo de este Derecho por tratarse de nuevo método de resolución de conflictos que se base en la comunicación y diálogo para llegar a una solución entre las partes en conflicto. Tanto el menor y la víctima obtendrían un beneficio de una manera menos represiva y atendiendo a los intereses de ambos mediante un método alternativo, como puede ser la mediación, que cada vez está cobrando más importancia dentro de nuestro sistema penal de menores.

8. BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ RAMOS, F., “Mediación penal juvenil y otras soluciones extrajudiciales”, *International e-Journal of Criminal Science*, art. 3, nº 2, 2018. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4876029>

BERNUZ BENEITEZ, Mª J y FERNÁNDEZ MOLINA, E, *Justicia de menores*, Síntesis, Vallehermoso, 2018.

BERNUZ BENEITEZ, M^a. J., “Las posibilidades de la justicia restaurativa en la justicia de menores (española)”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología* (en línea), nº 16-14, 2014. Disponible en <http://criminnet.ugr.es/recpc/16/recpc16-14.pdf>

CANTARERO BANDRÉS, R., “Los menores y el Derecho Penal”, *Derecho Privado y Constitución*, nº 7, 1995.

COLÁS TURÉGANO, A, *Derecho penal de menores*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011.

CRUZ BLANCA, M^a J. y BENÍTEZ ORTÚZAR, I. “El interés superior del menor y la proporcionalidad en el derecho penal de menores: contradicciones del sistema” en *El derecho penal de menores a debate. I Congreso Nacional sobre Justicia Penal Juvenil*, Dykinson, Madrid, 2010. Disponible en <https://app.vlex.com/#vid/219533853>

GARCÍA PÉREZ, O., “Los actuales principios rectores del Derecho Penal Juvenil: un análisis crítico”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, nº3, Madrid, 1999, citado en HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, Bosch, Comte d’Urgell, 2003.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M., “Los Tribunales para niños: creación y desarrollo”, *Historia de la creación: Revista universitaria*, nº 18, 1999.

GORDILLO SANTANA, L. F., *La justicia restaurativa y la mediación penal*, Iustel, Paracuellos de Jarama, 2007.

GUTIÉRREZ I ALBENTOSA, J. M., *El principio de legalidad en la jurisdicción de menores*, Bosch Editor, Barcelona, 2017.

HIGUERA GUIMERÁ, J. P., *Derecho penal juvenil*, Bosch, Comte d’Urgell, 2003.

JERICÓ OJER, L., “El impacto (probablemente no previsto) de la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo en el Derecho penal de menores”, *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, nº 20, 2018

JIMÉNEZ DÍAZ, M^a. J., “Menores y responsabilidad penal: el debate se reabre”, *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, nº 49, 2015, pp. 155-179.

MOLINA LÓPEZ, R., “El principio de oportunidad en el proceso penal de menores”, *Nuevo Foro Penal*, N^o 72, 2009. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3822985.pdf>

MONTERO HERNANZ, T., *La justicia juvenil en España. Comentarios y reflexiones*, La Ley, Las Rozas, 2009.

MORENO-TORRES SÁNCHEZ, J., “Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”, Save the Children, 2015. Disponible en https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/modificacion_del_sistema_de_proteccion_a_la_infancia_y_a_la_adolescencia.pdf

MUÑOZ CONDE, F., *Derecho penal. Parte general*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

ORNOSA FERNÁNDEZ, M^a R., *Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores*, Bosch, Comte d’Urgell, 2003.

QUINTERO OLIVARES, G., *Parte General del Derecho Penal*, 5^a Edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

RAVETLLAT BALLESTÉ, I. “El interés superior del niño: concepto y delimitación del término”, en *Educatio Siglo XXI*, Vol. 30 nº 2, Universidad de Murcia, 2012

TAMARIT SUMALLA, J. M^a., “Principios político-criminales y dogmáticos del sistema penal de menores” en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., TAMARIT SUMALLA, J. M^a y GÓMEZ COLOMER, J. L., *Justicia penal de menores y jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación)*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002.

TORRADO TARRÍO, C., “Mediación en el derecho penal de menores: nuevos retos y realidades”, *Una mirada hacia la Justicia Restaurativa: recuperando del derecho perdido*. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/4063271.pdf>

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., *Delincuencia juvenil*, Dykinson, Madrid, 2019.

VIDAL HERRERO, M^a. S., *Crítica al modelo de responsabilidad penal del menor en la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores hacia un "modelo social de responsabilidad" del menor infractor*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2015.